

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., once (11) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Rad: 11001-31-10-030-2022-00129-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio por la ciudadana **BLANCA LILIA CUERVO ESPINOSA**, identificada con la cédula de ciudadanía No.41.568.772 contra **UNISALUD – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**.

ANTECEDENTES

La ciudadana **BLANCA LILIA CUERVO ESPINOSA**, identificada con la cédula de ciudadanía No.41.568.772, en nombre propio inicia acción de tutela contra **UNISALUD – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** por considerar que se le están vulnerando su derecho fundamental al DEBIDO PROCESO y HABEAS DATA.

HECHOS Y PRETENSIONES

Refiere la accionante que el día 11 de febrero de 2022, recibió vía correo electrónico la notificación de imposición de multa por valor de \$62.600, por parte de la accionada **UNISALUD – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**, en razón al incumplimiento de cuatro citas médicas.

Seguidamente manifiesta que nunca se le notificó de la actuación sancionatoria, por lo que no le fue posible ejercer su derecho de contracción respecto a la multa impuesta.

Refiere que presentó derecho de petición ante **UNISALUD – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**, respecto al cual se emitió respuesta en la que se informó que se encontraban realizando seguimiento y cobro de cartera por citas incumplidas durante el periodo 2016 a la fecha.

A la fecha de presentación de la acción de tutela continúan las multas en el sistema de la accionada.

En razón a lo anterior pretende que el Juzgado tutele el derecho fundamental al **HABEAS DATA** y al **DEBIDO PROCESO** y se ordene a la **UNISALUD – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** declarar la nulidad de las multas impuestas en su contra por ser un actuar violatorio de sus derechos fundamentales y se elimine del sistema las sanciones impuestas en contra de la accionante.

PRUEBAS

La parte accionante anexa con el escrito tutelar, los siguientes documentos:

- Copia del correo remitido por Unisalud –Universidad Nacional de Colombia, mediante el cual le indican a la accionante la multas por valor de \$62.600.
- Copia del Derecho de Petición remitido a Unisalud –Universidad Nacional de Colombia por la accionante.
- Respuesta al derecho de petición.

ACTUACIÓN PROCESAL

- 1.- Admitida la acción de tutela el día 03 de marzo de 2022, se ordenó la notificación a **UNISALUD – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**, para que en el término de dos (2) días se pronunciaran sobre los hechos materia de la presente acción.
- 2.-El día 03 de marzo de 2022, se notificó a través del correo institucional del Juzgado, a **UNISALUD – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.
- 3.- Dentro del término legal conferido, la **UNISALUD – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**; no allegó contestación a la acción de tutela.

CONSIDERACIONES

Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que

estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela.

La ciudadana **BLANCA LILIA CUERVO ESPINOSA**, identificada con la cédula de ciudadanía No.41.568.772, se encuentra legitimada por activa para solicitar el amparo del derecho fundamental al **DEBIDO PROCESO** y al **HABEAS DATA** en virtud de lo dispuesto en el art. 86 de la Constitución Política de Colombia. *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.*

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, la **UNISALUD – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**, es a quien se endilga el actuar vulnerador del derecho invocado por la accionante.

Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado.

HABEAS DATA:

En la sentencia SU-082 de 1995 la Corte diferenció los derechos a la intimidad y al hábeas data y, en particular, distinguió tres derechos fundamentales derivados del artículo 15 Superior, a saber: la intimidad, el buen nombre y el hábeas data. En aquella oportunidad, determinó que el hábeas data es un derecho fundamental autónomo que comprende tres facultades concretas: (i) el derecho a conocer las informaciones que a su titular se refieren; (ii) el derecho a actualizar tales informaciones; y (iii) el derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad. (T-238 del 2018)

La Corte Constitucional en sentencia T-1061 de 2010 ha expuesto lo siguiente:

“En torno al contenido del derecho al hábeas data, la Corte, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que aquél se manifiesta por tres facultades concretas que el citado artículo 15 reconoce a la persona a la cual se refieren los datos recogidos o almacenados:

- a) El derecho a conocer las informaciones que a ella se refieren, comprende la posibilidad de exigir que se le informe en qué base de datos aparece reportado, así como poder verificar el contenido de la información recopilada;
- b) El derecho a actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día, agregándoles los hechos nuevos, de solicitar que sea ingresada de manera inmediata al banco de datos la nueva información, principalmente de aquella que trate sobre el cumplimiento de las obligaciones;

c) El derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad.”

DERECHO AL DEBIDO PROCESO.

El artículo 29 de la Constitución Nacional establece: “*El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas...*”

El espíritu de la norma en cita, es la garantía con que cuenta toda persona o la sociedad, para pedir de las autoridades competentes la protección de su derecho de defensa, que le permitan una decisión en justicia, cuando éste se encuentre amenazado por actuaciones judiciales y administrativas ante la inobservancia del principio de legalidad.

DEL CASO EN CONCRETO

Corresponde a esta Juzgadora determinar si en la presente acción constitucional, **UNISALUD – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**, se encuentra vulnerando el derecho fundamental al **DEBIDO PROCESO y HABEAS DATA** de la accionante **BLANCA LILIA CUERVO ESPINOSA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.568.772, al pretender efectuar el cobro de sanciones por inasistencia a citas medicas.

De las actuaciones advertidas en el expediente, se tiene que la accionante recibió el día 11 de febrero de 2022 comunicación proveniente de la accionada **UNISALUD – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**, en la cual le informaba la existencia de cuatro multas sin cancelar por la inasistencia a consultas medicas en el año 2017 y 2019.

Por lo anterior, la accionante radicó derecho de petición ante **UNISALUD – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**, en el cual solicitó eliminar el reporte de citas presuntamente incumplidas, así como abstenerse de continuar con el cobro de las mismas.

En la respuesta al derecho de petición la accionada **UNISALUD – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** refirió que se encuentran realizando seguimiento y cobro de cartera por citas incumplidas durante el periodo 2016 a la fecha y que dicho cobro se realiza con base en lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1438 de 2011 en concordancia con la normatividad interna en el Acuerdo No.2 de 2013 de la Junta Directiva Nacional de Unisalud el cual prevé: La Unidad de Servicios de Salud-UNISALUD efectuará el cobro de las multas por inasistencia que se han causado desde la entrada en vigencia de la Resolución No. 3 de 2010 de la Junta Directiva Nacional de Unisalud.

Ahora bien, entrará esta Juzgadora a resolver lo pertinente dentro de la presente acción de tutela, bajo los siguientes argumentos:

Se tiene del ordenamiento legal, que en la Ley 1438 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”, específicamente en su artículo 55, establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 55. MULTAS POR INASISTENCIA EN LAS CITAS MÉDICAS. Entrada en vigencia esta ley queda prohibido el cobro de cualquier tipo de multas a los cotizantes y beneficiarios de los regímenes contributivo y subsidiado, así como la población vinculada, en lo establecido para citas médicas programadas, para lo cual el Ministerio de la Protección Social diseñará un mecanismo idóneo para su respectivo cumplimiento, esto es ser sancionado pedagógicamente, mediante método de recursos capacitación que deberán ser diseñados por las Entidades Promotoras de Salud para tal fin”. (Subrayado fuera del texto)

En la decisión T- 248 de 2015, en relación con la prohibición del cobro de multas o sanciones por inasistencia a citas médicas, se estableció lo siguiente:

“Si el usuario del Sistema de Salud no accede al servicio (cita médica, medicamento, procedimiento, examen, etc.) suceden dos cosas, primero, no existe el deber correlativo de contribuir con el financiamiento del Sistema a propósito del servicio que le iba a ser ofrecido; y, segundo, si en todo caso la EPS cobra el valor del servicio que no prestó, el cobro tendría una naturaleza distinta a la de un pago moderador, que no es de origen legal”.

A su vez, se tiene que el Ministerio de Salud en su pagina oficial emitió un comunicado de prensa de fecha 11 de febrero de 2011, en el que claramente se informó la prohibición de cualquier tipo de multas o sanciones por incumplimiento a citas medicas programas a partir del 19 de enero de 2011.

De lo anterior se concluye que la decisión adoptada por la accionada **UNISALUD – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** respecto a efectuar el cobro de multas por el incumplimiento a citas médicas, contraria el ordenamiento legal y vulnera el debido proceso que tiene la accionante, máxime cuando en la respuesta brindada al derecho de petición pretende argumentar que dicho actuar tiene fundamento en un Acuerdo emitido por la Junta Directiva Nacional de Unisalud, con el cual se pretende desconocer el ordenamiento jurídico dándole a sus decisiones internas una jerarquía superior a la Ley 1438 de 2011.

Aunado a lo anterior, dentro del presente asunto la accionada **UNISALUD – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** dentro del término legal guardó silencio, por lo que ha de darse aplicabilidad a la presunción de veracidad de que trata el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece:

“ARTICULO 20. PRESUNCION DE VERACIDAD. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”.

Conforme a lo anterior, ha de tenerse que el actuar de la accionada **UNISALUD – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** efectivamente vulnera los derechos fundamentales al HABEAS DATA y al DEBIDO PROCESO de la accionante, como

quiera que se pretende el cobro de multas por inasistencia a citas médicas, sin fundamento alguno y muy por el contrario, en contravía del ordenamiento legal, así como también pretende consignar información errónea respecto a que la accionante es una deudora de las mencionadas multas en sus bases de datos.

Por lo expuesto, este Despacho Constitucional tutelaré los derechos de la accionante.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE

PRIMERO: TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES de la ciudadana **BLANCA LILIA CUERVO ESPINOSA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.568.772, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Ordenar a **UNISALUD – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** que dentro del término de cuarenta y ocho horas (48 h.) contadas al recibo de la respectiva comunicación, proceda a eliminar del sistema de multas de Unisalud, las sanciones impuestas en contra de la accionante **BLANCA LILIA CUERVO ESPINOSA**, por la no asistencia a cuatro citas médicas. **Oficiese.**

TERCERO: Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

CUARTO: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

QUINTA: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

CUMPLASE,

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS
JUEZ**

Firmado Por:

Viviana Marcela Porras Porras
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 030
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **331e8082920a714c6aa12f9f40b692e1d0ad0ba07f0c8cb1e1aba66a075af382**

Documento generado en 11/03/2022 09:04:30 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>